

**EL OBSERVATORIO SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA:
OBJETIVOS Y ACTIVIDAD REALIZADA POR
EL MISMO. CONGRESO VIOLENCIA DOMÉSTICA**

**Soledad Carrillo López
de la Fuente**

Secretaria General Instituto
de la Mujer

EL OBSERVATORIO SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA:
OBJETIVOS Y ACTIVIDAD REALIZADA POR EL MISMO.
CONGRESO VIOLENCIA DOMÉSTICA.
MADRID, 12 DE JUNIO DE 2003

La violencia contra las mujeres es una de las principales preocupaciones del Instituto de la Mujer y por ello, entre otras actuaciones, se han impulsado, desde el mismo, los Planes de acción contra la violencia, siendo el último el II Plan Integral (2001-2004), aprobado en el Consejo de Ministros del día 11 de mayo del 2001.

Aunque entre sus áreas de actuación se recoge un área específica destinada a las medidas legislativas y procedimentales, que permitan establecer un marco legal para proteger a las víctimas, con frecuencia, hemos recogido la sensación de desamparo que sienten en muchas ocasiones estas mujeres por la falta de inmediatez de la respuesta judicial que reciben en esos casos.

Esto, viene a suponer para ellas una doble victimización, la del maltratador y la del sistema, que no da una respuesta lo suficientemente ágil a este problema.

El Instituto de la Mujer es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaría General de Asuntos Sociales cuya finalidad es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.

La promulgación de la Constitución española, supuso el reconocimiento de la igualdad ante la ley de hombres y mujeres como uno de los principios inspiradores de nuestro ordenamiento jurídico, a la

vez que demandaba de los poderes públicos promover las condiciones, para que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas. De este modo se establece que la igualdad jurídica no basta para conseguir una igualdad real, lo que consagra la acción positiva del Estado.

Para cumplir estos objetivos se creó por Ley 16/83, de 24 de octubre, el Instituto de la Mujer como Organismo Autónomo, promotor de las políticas de igualdad del Gobierno cuya regulación actual se contempla en el Real Decreto 774/97, de 30 de mayo.

El Instituto de la Mujer desarrolla su actividad en el marco que ofrecen los Planes de Igualdad.

La mayoría de sus actuaciones se dirigen a luchar contra la violencia doméstica y erradicar todas aquellas actitudes y conductas que supongan una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual, entre las que cabe destacar las siguientes:

1. I y II Plan Integral contra la Violencia Doméstica. Este último, con una vigencia de cuatro años (2001 al 2004), está compuesto de 58 medidas, de las que se han puesto en marcha 53 y entre las que señalamos las siguientes:

— Elaboración de un programa orientado a la Educación Secundaria, «Prevenir la violencia contra las mujeres: Construyendo la igualdad», con textos y material audiovisual, relativo a los malos tratos, analizando las causas de la violencia contra las mujeres, para debate en las aulas de Institutos de Educación Secundaria.

— Realización de acciones orientadas a la formación del profesorado y asesoramiento de los centros educativos a través del Proyecto RELACIONA.

2. Impartición de numerosos cursos de formación, dirigidos al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al personal de los órganos judiciales y profesionales del Derecho, de los Servicios Sociales y del ámbito sanitario, a fin de mejorar la atención y asistencia que se presta a las mujeres víctimas de la violencia.

3. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante la cual, entre otras, se han introducido los juicios rápidos, que han entrado en vigor a partir del pasado 28 de abril.

4. Firma de un Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para la puesta en marcha de un Observatorio sobre la Violencia Doméstica, para el seguimiento de las sentencias, formación especializada del personal de ámbito judicial, especialización de Juzgados y análisis de la realidad sociológica del fenómeno de la violencia doméstica.

Al citado «Observatorio sobre la Violencia Doméstica» se incorporaron posteriormente las Comunidades Autónomas que tienen transferidas competencias en materia de justicia, en concreto las siguientes: Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra y Madrid.

5. Firma de un Convenio Específico de Colaboración entre Radio Televisión Española y el Instituto de la Mujer. En el marco de este Convenio se han realizado el I Foro Nacional «Mujer, Violencia y Medios de Comunicación».

6. Ampliación de recursos económicos para mujeres víctimas de malos tratos, mediante la Renta Activa de Inserción y una ayuda suplementaria de la misma (600 euros), para los supuestos de desplazamiento del lugar de residencia y para compensar las dificultades de acceso al empleo de las mismas.

7. Regulación de un nuevo incentivo para la contratación laboral de personas víctimas de violencia doméstica consistente en la aplicación de una bonificación, en la cuota empresarial a la Seguridad Social, del 65%, durante un máximo de 24 meses.

Además se están llevando a cabo una serie de actuaciones recogidas en el *Proyecto de ley Orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integra-*

ción social de los extranjeros que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, y en la *Orden de Protección* que se aprobará próximamente y que ha sido pactada, por todos los grupos parlamentarios, en la Subcomisión encargada de formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género.

Por otra parte, el *IV PIOM*, aprobado el pasado mes de marzo, recoge un serie de actuaciones encaminadas a conseguir la inserción socio-laboral de las mujeres víctimas de violencia.

Aunque el Instituto de la Mujer tenía ya establecida una trayectoria de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con el que se han venido realizando, en estos años, diferentes actividades formativas, así como con el M.^o de Justicia, con el que existe también una estrecha colaboración para la ejecución de las medidas legislativas del II Plan contra la violencia, se pensó que era necesario articular un instrumento específico de coordinación entre nuestras tres instituciones, para conseguir una herramienta como el Observatorio, que pudiera ser sumamente eficaz para luchar contra el terrible problema de la violencia.

Una de las primeras iniciativas tomadas, en el marco de este Observatorio, es la celebración de este Congreso. Creemos que puede ser un espacio importante para reflexionar sobre los diferentes aspectos de la violencia que sufren las mujeres desde diferentes ópticas: legislativa, judicial, psicológica, sociológica, etc. Al mismo tiempo, va a permitir exponer las iniciativas que se van a llevar a cabo, a través del mencionado Observatorio.

Otra iniciativa importante es la creación del Registro Nacional de medidas contra la violencia del que se va a hablar ampliamente en la ponencia siguiente.

En este sentido, debo decirles que, cuando realizamos, en el propio Instituto de la Mujer, con motivo de la Presidencia Europea, un estudio sobre las medidas adoptadas, por los Estados miembros de la Unión Europea, del que se derivó una propuesta de Guía de Buenas Prácticas para luchar contra la violencia hacia las mujeres, se puso de manifiesto que existía una laguna importante sobre datos relativos al tema, especialmente relevante en el

caso de las sentencias. Las tres instituciones que firmaron el convenio de colaboración para poner en marcha el Observatorio –Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales– al que se sumaron las Comunidades Autónomas que tienen transferidas competencias en materia de justicia, ya hemos iniciado las tareas pertinentes para hacer desaparecer las lagunas señaladas. La Universidad de Zaragoza va a llevar a cabo un análisis de una muestra representativa de sentencias y, a raíz de este estudio, es de esperar que se diseñe un protocolo de recogida de información sobre las sentencias dictadas en los Tribunales de Justicia, referidos a actos de violencia contra las mujeres.

Otra consecuencia de la creación del Observatorio de Igualdad es el impulso que se pretende dar a la formación de jueces y juezas, magistrados y magistradas, en materia de violencia, ya que ello va a suponer una especial sensibilización, al enriquecer su perspectiva sobre la situación de la víctima.

En fin, no cabe duda de que el Observatorio tiene un trabajo importante que hacer. Ha nacido con la esperanza de que sea un instrumento que permita, por una parte, seguir profundizando en el trabajo que la Administración General del Estado, y concretamente el Instituto de la Mujer, viene realizando para erradicar la violencia y para ayudar a las víctimas a paliar sus efectos.

Por otra parte, también confiamos en que, a partir de la creación del Observatorio y de su desarrollo, puedan superarse las lagunas que puedan existir y, de esta forma, podamos ayudar a conseguir que la grave violación de los derechos humanos que es la violencia contra las mujeres desaparezca. A todas nosotras y a todos nosotros nos corresponde una importante cuota de responsabilidad, no sólo como gestores o gestoras de determinadas políticas, sino también como ciudadanas y ciudadanos de a pie, en esta ímproba tarea.